

Análisis de las propuestas hechas hasta ahora

C. Guillermo Ramos
Fredy Villalta

De las 49 tesis que conformaron el bloque 3 del debate nacional, en lo que se conoce como documento intermedio, y de las cuales 25 fueron recogidas en el documento síntesis; sólo 18 quedaron plasmadas en el documento final al ser aprobadas con más del 50 por ciento de los participantes en la asamblea pública. Sin embargo el número de tesis finalmente aprobadas, en este punto, no es precisamente lo más importante. Lo que sí interesa y debe destacarse es que en ellas se recoge el sentir y el pensar de las fuerzas sociales que atendieron el llamado pastoral de la Iglesia católica.

En el bloque 3 se presenta el juicio y la interpretación que hacen las organizaciones respecto de las diversas soluciones que se han intentado para superar el conflicto. Ellas van desde un análisis de lo que significó el proceso reformista iniciado con el golpe militar del 15 de octubre de 1979, hasta sus consideraciones sobre los intentos de diálogo y negociación entre el FDR-FMLN y el gobierno-Fuerza Armada.

1. El golpe militar del 15 de octubre de 1979 y las dos juntas de gobierno subsiguientes

El golpe del 15 de octubre fue el resultado de condiciones objetivas, no de voluntades individuales o grupales.¹ Antes de su ejecución imperaba una situación intolerable que fue precisamente la causa primaria del movimiento golpista. Esta apreciación sobre la causa fundamental del golpe parece reflejada bajo distintas formulaciones en las tesis 43, 44 y 46 del documento final. Quizás lo más importante de este planteamiento, en lo cual coincidió una amplia mayoría de las fuerzas sociales participantes en el debate, es su contraste con las tesis manejadas por los sectores de derecha y el gran capital. Para ellos el golpe del 15 de octubre, y la política económica con él inaugurada, antes de ser el resultado de situación caótica alguna ha sido, más bien, el origen de la actual crisis.²

En este mismo sentido, y contrariamente a lo que sostienen las fuerzas de derecha, el 75 por ciento de los participantes coincidió en

que "el golpe militar fue un intento de solución de tendencia progresista y democratizante a la crisis" (tesis 46); un intento para superar la crisis profunda en que se encontraba la estructura económica y socio-política del país, que ya entonces experimentaba síntomas de descomposición y aún de guerra civil.³ Todo ello expresión de una profunda crisis estructural originaria.

Ahora bien, como se observa en la misma tesis, una amplia mayoría de las fuerzas sociales no sólo reconoce en el golpe un intento de solución a la crisis orgánica del país, sino también el inicio de un proceso de acciones positivas dirigidas a ese propósito. Sin embargo, a la larga no significó una alternativa realista a la crisis, pues "antes de resolver los grandes problemas del país, más bien profundizaron las contradicciones, polarizaron los ánimos e impulsaron la guerra," según el consenso de un 88 por ciento de las fuerzas sociales (tesis 43). Se trata de una interpretación complementaria del mismo proceso. En principio el golpe y, en general, las dos juntas de gobierno que le sucedieron intentaron ser una respuesta ante el agotamiento del modelo político vigente; pero los giros que fue asumiendo, lejos de constituir las en una respuesta real, las convirtieron en un elemento agudizador de la ya profunda crisis.

El segundo componente de la interpretación es aplicado de especial manera al ejercicio de la segunda junta, con la cual "se inicia el proyecto contrainsurgente y se entra al mayor período de terror de la historia de El Salvador con la democracia cristiana como cobertura, mientras se hace cada vez más grave la injerencia norteamericana" (tesis 43). Con la segunda junta se consolidó el poder de las "fuerzas regresivas y represivas" (tesis 46).

Ciertamente, el ejercicio de la segunda junta de gobierno diferió cualitativamente del de la primera, en la cual participaron elementos progresistas de mucha credibilidad. La segunda junta, respondiendo a un esquema contrainsurgente, y bajo un clima de autorita-

rismo militar, exclusión política y reformismo social cristiano, consolidó su poder a través de dos líneas fundamentales: la represión generalizada contra el movimiento popular y un programa de reformas sociales. Reformas y represión, estas fueron sus dos líneas.

En definitiva, el proceso iniciado el 15 de octubre concluyó con la negación real y efectiva de los principios que lo animaron en su origen. Lo que se presentó al principio como una alternativa y una esperanza, desembocó y, o degeneró en lo que ha sido el período de mayor represión y violaciones de los derechos humanos que ha conocido el país y, a su vez, en una acentuación de la injerencia norteamericana. He aquí el juicio y la memoria histórica de las fuerzas sociales respecto a lo que de cara a la crisis estructural de El Salvador significó el proceso reformista impulsado por la juventud militar y la democracia cristiana.

Haciendo un balance político, del proceso, Thomas R. Campos formulaba este mismo juicio de la siguiente forma: "desde el punto de vista de los hechos políticos, el balance es también negativo en relación con los propósitos y las esperanzas que dieron lugar al 15 de octubre... La sucesión de hechos contrarios al 15 de octubre fue minando toda esperanza. El abandono público y razonado del proyecto por parte de los mejores hombres de la primera junta y del primer gobierno, el inmediato repuntar de la represión, la recuperación del poder y el mando por los antiguos militares; ... el aislamiento político de la democracia cristiana; la galopante ascensión con la segunda junta de la más bárbara, sistemática y continuada violación de los derechos humanos más fundamentales, la imposibilidad de la más mínima confianza en la labor judicial, el creciente intervencionismo de los norteamericanos; la reorganización de las fuerzas oligárquicas... Todo ello era la negación del 15 de octubre. El proceso quedó en otras manos y siguió rumbos muy distintos de los previstos."⁴

El 79 por ciento de las fuerzas sociales considera que la razón principal de este fracaso radica en que "no se dio participación al movimiento popular y no se modificaron las estructuras de poder" (tesis 45). Factualmente es constatable que con las medidas y políticas puestas en marcha tras el 15 de octubre, el dinamismo del proceso apuntó, entre otras cosas, a conseguir el aislamiento y debilitamiento de las organizaciones populares entonces en auge; dinamismo que se acentuó e hizo evidente con el ascenso de la segunda junta.

En esta línea, el 86 por ciento de las fuerzas sociales considera que el golpe militar, y el proceso que de él se derivó, si bien trataron de ser un intento de respuesta a la crisis del modelo vigente, esencialmente fueron "un reacomodo impulsado por Estados Unidos para evitar el triunfo revolucionario impulsado por el movimiento popular" ante la "necesidad de dar una imagen democrática y de contrarrestar el influjo del triunfo sandinista" (tesis 44).

2. Intento de alcanzar el poder por medio de la lucha armada

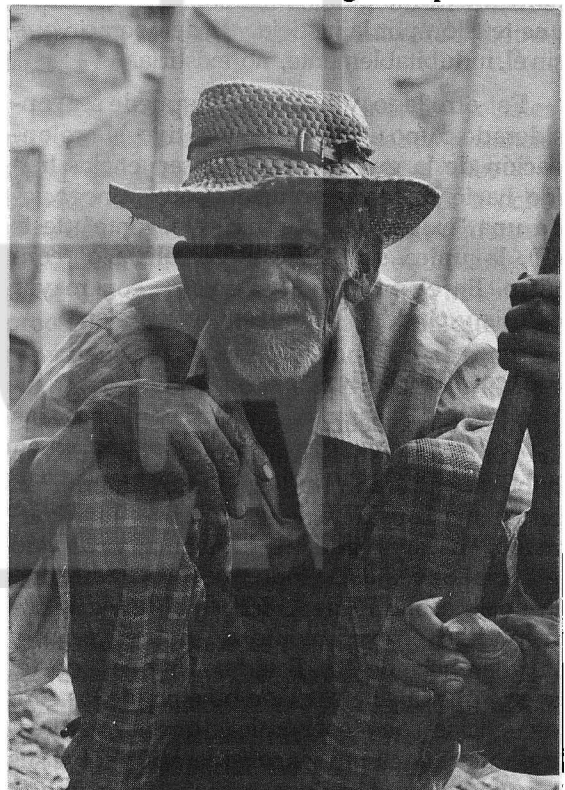
En una coyuntura socio-política cargada de negatividad, como la que le sirvió de base, la lucha armada ha sido un instrumento válido para su superación. Según el 88 por ciento de las organizaciones, la lucha armada ha sido una alternativa y "una forma legítima de lucha para superar una situación intolerable" (tesis 48). Además, ha constituido la respuesta necesaria de sectores representativos de la sociedad, ante la represión, la injusticia estructural y la imposibilidad de una real participación popular.

De acuerdo a esta interpretación, la lucha armada no ha sido, como sectores minoritarios pretenden presentarla, un resultado arbitrario producto de voluntades individuales o grupales. Todo lo contrario, la lucha se engendró en las condiciones objetivas de injusticia estructural y sólo surgió "al agotarse los cami-

nos de solución no violenta y al cerrarse las posibilidades reales de participación popular" (tesis 48). Se trata, como puede observarse, no de una justificación *a priori* de la lucha armada, sino de un reconocimiento objetivo de las causas que le dieron origen y de su legitimidad ante una situación límite en la cual los mínimos espacios para una lucha estrictamente política se encontraban cerrados.

En resumen, y ésto ya ha sido señalado, no es una justificación sin más de la lucha armada lo que las fuerzas sociales han dejado plasmado en este punto; sino más bien, su juicio cabal sobre el ajustamiento de ésta a la realidad.

Sin embargo, aún siendo una expresión válida y legítima de lucha, el 82 por ciento de las organizaciones considera que su desencadenamiento y posterior desarrollo no han traído la solución a los ingentes problemas



del país (tesis 49). Pero ello no es todo, el 98 por ciento de las organizaciones coinciden en que su prolongación no sólo no ha resuelto los problemas, sino que "ha traído más males que bienes (costos humanos, morales, sociales, políticos y económicos) y ha agravado las causas que motivaron el conflicto" (tesis 47).

Ciertamente la lucha armada en tanto alternativa para superar el estado de injusticia estructural, no ha dado factualmente los resultados perseguidos; pero "si "ha potenciado al FMLN como una fuerza real sin la cual no puede encontrarse una solución realista al conflicto" (tesis 49). Esto es de suma importancia, pues aun cuando el balance, tanto del proceso militar reformista del 15 de octubre, como de la lucha armada en tanto intento de solución a la crisis, sea negativo; el proceso en general ha hecho del FMLN una fuerza político-militar poderosa y representativa⁵ que, en su enfrentamiento al proyecto norteamericano-gubernamental, ha generado una tensión por la justicia y la democracia que sin él, indubitablemente, no existiría.

Por otro lado, y esto también puede ser considerado como un elemento positivo, la prolongación de la guerra y sus consecuencias han ido haciendo de la solución político-negociada una "exigencia necesaria y urgente" (tesis 47), la única salida justa y realista al conflicto. En el punto 3.3. se vuelve con mayor énfasis y claridad sobre este señalamiento.

3. El conflicto bélico

El conflicto bélico, según el 82 por ciento de las organizaciones, ratificando lo que ya habían expresado en el punto anterior al hacer sus consideraciones sobre la lucha armada, "ha agravado los problemas causando gravísimos costos de todo tipo, profundizando la crisis económica, social y política e incrementando el sufrimiento de las mayorías y la injerencia de los Estados Unidos," de tal suerte que la sola revisión objetiva de las consecuencias socio-económicas que ha acarreado, antes que cualquier consideración sobre sus resultados en términos estrictamente milita-

res, puede demostrarnos que "la opción militar y la violencia no son la solución, sino parte del problema" (tesis 52).

El rechazo a la postura militarista y guerrillera, según la cual la derrota militar del enemigo es un paso necesario e imprescindible para resolver los problemas nacionales, va un tanto más allá de su deslegitimación de cara a los resultados factuales que el conflicto bélico ha ocasionado. No sólo sus resultados muestran y desenmascaran la falacia que se esconde tras esa posición. La dinámica misma que la guerra ha experimentado en los últimos ocho años parece dar elementos para desvirtuarla.

En efecto, tras ocho años de guerra, no puede decirse que las partes en conflicto, o alguna de ellas, se encuentren sensiblemente debilitadas y que, por ende, un triunfo militar definitivo a favor de una de ellas sea previsible a corto o mediano plazo. Ni al FMLN ni a la Fuerza Armada pueden aplicarse sin más una consideración como ésta. Todo lo contrario, lo que los datos y la dinámica militar de estos años parecen indicar es que la Fuerza Armada así como el FMLN se han desarrollado, han crecido, se han fortalecido y han complejizado sus estructuras orgánicas. En fin, de una u otra forma, las partes en conflicto han logrado desarrollarse cuantitativa y, o cualitativamente en el transcurso mismo de la guerra.

Tal situación ha conducido, sino a un *impasse*, si a un equilibrio dinámico que cada parte lo interpreta como favorable para su línea estratégica. En este sentido, según la formulación del 63 por ciento de las fuerzas sociales, "la guerra se encuentra empantanada... y nada hace preveer la posibilidad de un triunfo militar a corto o mediano plazo para ninguna de las partes en conflicto" (tesis 54).

Las partes, ciertamente, cuentan con la suficiente capacidad y experiencia acumulada para continuar la guerra dado el desarrollo político militar del FMLN, el perfecciona-

"La razón principal de su fracaso radicó en que no se dio participación al movimiento popular y no se modificaron las estructuras de poder."

miento de sus tácticas de guerra, sus reacomodos estratégicos y su convicción ideológica; así como por el gigantesco aparato militar del ejército, la cantidad de recursos humanos y materiales con que cuenta y la ayuda y asesoría que recibe de los norteamericanos. Pero el juicio y deslegitimación que de la opción militar hacen las organizaciones parten de un principio aún más realista, sobre todo más apegado a la realidad y a las necesidades de las mayorías populares: la sola capacidad para continuar la guerra no define, ni remotamente, la posibilidad de resolver el problema de El Salvador. De la demostración de contar con suficiente capacidad para continuar la guerra no se sigue, por razón alguna, que ése sea el mejor y el más acertado camino para resolver el problema originario del país; aún más, no se sigue siquiera mínimamente que sea uno de los caminos para hacerlo.

He aquí un punto, que al igual que los costos humanos, morales y materiales ocasionados por el conflicto bélico, sirve de base para la deslegitimación de la guerra como vía de solución y superación del conflicto.

De esta suerte retomando la idea planteada al concluir el punto 3.2., la postura de las fuerzas sociales de cara al conflicto actual es clara y decidida. Según el consenso unánime de las mismas, "la prolongación de la guerra y el peligro de su profundización y regionalización demuestra lo necesario y urgente de una solución negociada, que tenga en cuenta las raíces estructurales de la misma y la parte de la población que participa en ella" (tesis 50). No se trata, para las fuerzas sociales, de una posible alternativa más, sino de la única vía justa y racional para superar el conflicto e ir resolviendo los problemas del país.

Visto desde la óptica de las organizaciones, la guerra, su prolongación y sus consecuencias han hecho de la solución político-

negociada una necesidad histórica y una exigencia popular.⁶ Esta es una tesis a la que sin duda cualquier salvadoreño sensato, y sin posturas políticas ideologizadas, estaría presto a adherirse.

Las partes enfrentadas en el campo de batalla deben tomar muy en cuenta la anterior consideración de las fuerzas sociales, pues, como bien se formulara en la edición 454-455 de esta revista, hace exactamente dos años, "no son pocos ni con pocas razones quienes decidida y públicamente se sitúan en favor del diálogo."⁷ Todo lo contrario, son los más y con las más poderosas y convincentes razones. Pese a ello, los enemigos del diálogo y la negociación parecen haber sido, hasta el momento, los triunfadores. Urge, por tanto, que las partes en conflicto consideren seriamente lo que en sana interpretación debe entenderse como una exigencia de las mayorías populares.

Muy probablemente las fuerzas sociales representadas en el debate no saben a ciencia cierta qué se debe hacer; pero sí saben, y bastante bien, qué no se debe hacer a ocho años de sufrir las consecuencias de la guerra y la destrucción. Lo que no debe continuar es la guerra, lo que urge es el inicio de un auténtico proceso de diálogo y negociación; lo que concretamente debe irse haciendo en el proceso queda en manos, no exclusiva, pero sí privilegiadamente de las partes. Privilegiadamente por ser ellos los actores y agentes directos de un proceso de esa naturaleza; pero no exclusivamente porque el centro de gravedad no deben ser los intereses particulares de cada una de las partes, sino las necesidades reales y objetivas de las mayorías populares.

Las fuerzas sociales no exigen una solución de vanguardia, o cosa parecida. De lo que se trata es, más bien, de un proceso de solución justa y participativa. En esta línea, el debate nacional y, especialmente las tesis aprobadas en el documento final pretenden ser un

"La intervención extranjera, especialmente la de Estados Unidos, es la principal responsable de la prolongación del conflicto armado."

aporte a la misma.

Finalmente, en la tesis 51 y 53, el 88 y 70 por ciento respectivamente, acusan a la intervención extranjera, en especial a la de Estados Unidos, y a sectores para los cuales la guerra significa un negocio, de ser los responsables principales de la "continuación y prolongación del conflicto armado en beneficio de sus intereses." De esta forma las fuerzas sociales no sólo se definen en favor del diálogo y la negociación, sino en contra de la guerra y sus promotores.

4. Los procesos electorales (de 1982 a 1988)

A seis años de haber entrado una vez más en la dinámica de los procesos electorales, interrumpidos con el golpe del 15 de octubre, sus resultados objetivos de cara al conflicto y a la posibilidad de su superación, han dejado mucho que desear y han dicho mucho de su realidad. Seis años después de haberse reinaugurado las elecciones periódicas, el juicio de las fuerzas sociales sobre ellas no es ni puede ser considerado un juicio *a priori* y sin fundamento.

Según el 82 por ciento de las organizaciones, los procesos electorales "por sí solos no son sinónimo ni garantía de democracia ni solución al conflicto" (tesis 56). En efecto, si tomamos en cuenta no sólo los resultados reales que han traído las elecciones desde 1982; sino, además el ambiente de guerra, polarización social y marginación política en el cual se han dado, resulta que las pretensiones de querer identificar procesos electorales con proceso democratizador y de querer hacer creer que los primeros representan la alternativa de solución al conflicto, quedan, de hecho, desvirtuadas.

En primer lugar, las elecciones no son, ni pueden ser, por sí solas, sinónimo de democracia. No son ni siquiera una garantía para el logro de la misma. Dadas las condiciones

objetivas del país y la coyuntura crítica en la cual se han realizado, creer que un proceso democratizador y, aún más, la solución al conflicto pueden girar en torno a la verificación de los procesos electorales es un grave error. Ni siquiera en principio es aceptable esta posición.

La democratización de El Salvador, correctamente entendida, no admite tales reducciones simplistas. La democratización debe ser entendida como un proceso mucho más amplio y radical, donde las elecciones sólo son un componente, y ni siquiera el más importante, del proceso total.

En segundo lugar, tampoco son sinónimo ni garantía de solución al conflicto del país. En el apartado 3.3., las fuerzas sociales se manifiestan unánimemente por el diálogo y la negociación como única vía realista y racional de solución para lograr una paz con justicia (tesis 50). En este sentido, las elecciones no son, ni pueden ser la solución al conflicto. Ello no significa que no puedan contribuir de alguna forma a la consecución de la paz. Podrían aportar mucho si el poder que de ellas emana fuera lo suficientemente real y efectivo para que los gobernantes y legisladores, que en teoría han apoyado la solución política, dieran pasos concretos y serios en aras de resolver el conflicto en el marco de la justicia.

Por esto, las fuerzas sociales consideran que, en sí mismas, las elecciones no pueden representar solución alguna a los problemas del país. Ciertamente han sido un intento en esa dirección, pero su sobrevaloración y absolutización han sido, en gran medida, las responsables de su fracaso.

Desde la lógica de las fuerzas sociales, las elecciones podrían contribuir enormemente a resolver el conflicto, sólo si se ponen al servicio de la solución política, sólo si sus resultados logran potenciar y crear condiciones

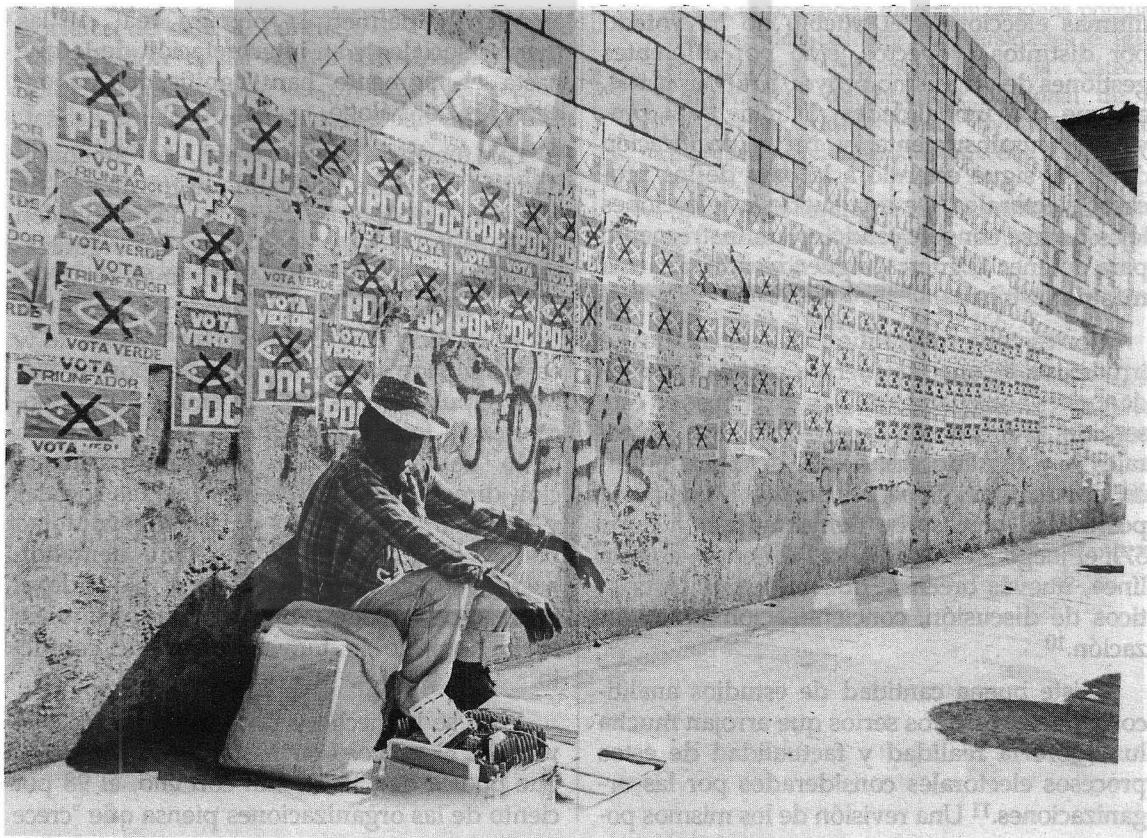
para un sincero y abierto diálogo nacional sin exclusiones de ningún tipo. De esta suerte, sólo en el marco de un proceso más amplio de democratización y pacificación del país, las elecciones lograrían adquirir un significado distinto y más apegado a las necesidades políticas y materiales de la población.

Entrando en un análisis más concreto de los procesos electorales verificados desde 1982, el 93 por ciento de las organizaciones considera que "han tenido grandes defectos: marginación de sectores representativos, falta de credibilidad con alto índice de abstencionismo, pobreza, política de las campañas electorales, dudosa y limitada expresión de la voluntad popular" (tesis 55). Así, de acuerdo a la percepción de las organizaciones, los alcances reales de estos procesos, tanto en términos de sus resultados políticos como de su representatividad, parecen ser más que redu-

cidos.

Un recorrido por cada uno de los eventos electorales mostraría sin mayor dificultad el apego a la realidad de este juicio de las fuerzas sociales. En ellos, los partidos contendientes no han sabido siquiera presentar planteamientos concretos y serios que respondan a los ingentes problemas del país; las "campañas electorales" se han convertido en un teatro de insultos y acusaciones, y el abstencionismo ante el precario mercado político ha sido notable. Todo esto no ha pasado desapercibido para las fuerzas sociales a la hora de formular su juicio.

Pero, además, los procesos electorales no sólo han adolecido de graves limitaciones y no han aportado lo que debieran a la solución del mayor problema nacional que es la guerra, sino que, según el 81 por ciento de las



"La lucha armada surgió al agotarse los caminos de solución no violenta y al cerrarse las posibilidades reales de participación popular."

organizaciones "han sido un elemento fundamental del proyecto contrainsurgente de Estados Unidos en su intento de legitimar la guerra y neutralizar al movimiento popular" (tesis 57). En este sentido, antes que un paso en la democratización y pacificación del país, han constituido un elemento esencial en la legitimación del proyecto norteamericano y de la guerra por ellos financiada.

Su importancia mayor, afirmaba ECA al referirse a los procesos electorales de 1982 a 1985, "está en servir de justificación al proyecto político hoy imperante en el país."⁸ Tal verdad parece seguirse manteniendo con las elecciones de marzo de este año, pese a los cambios producidos a nivel de los agentes políticos. Al igual que en las anteriores, en las últimas elecciones "el pueblo no ha votado por distintos proyectos, sino por diferentes gestiones de un mismo proyecto fundamental, aunque con modalidades distintas."⁹ El proyecto contrainsurgente, y no la pacificación del país, sigue estando a la base de los procesos electorales. De esta suerte las elecciones lejos de irse constituyendo en un instrumento para detener la guerra, siguen siendo un arma más de la misma.

No es una descalificación sistemática e irreflexiva lo que las fuerzas sociales pretenden; pues aun cuando no hay un énfasis en este sentido, sí reconocen que los procesos electorales han logrado crear una "apertura política" que aunque mínima es un paso y un aporte positivo al proceso de democratización (tesis 57); el juego electoral ha ido abriendo, en esta línea, nuevas brechas, nuevos espacios políticos de discusión, concientización y moviliación.¹⁰

Existe buena cantidad de estudios analíticos e interpretativos serios que arrojan mucha luz sobre la realidad y factualidad de estos procesos electorales considerados por las organizaciones.¹¹ Una revisión de los mismos po-

dría mostrarnos lo poco parcial que es el juicio de éstas al respecto; pese a las acusaciones de parcialidad que les hacen algunos sectores de la derecha.

5. Proceso de diálogo

Dado que en la tesis 50 las organizaciones han explicitado su postura respecto al diálogo y la negociación como la única vía realista de solución al conflicto, y que tal temática vuelve a aparecer en repetidas ocasiones en otros lugares del documento final; aquí, aun cuando debía ser el lugar más idóneo para hacerlo, no nos detendremos en mayores consideraciones al respecto. Sólo añadiremos aquellos punto señalados con mayor énfasis e indicaremos aquellos elementos que amplían y definen la postura real de las fuerzas sociales y su interpretación de lo que hasta el momento han significado los encuentros de diálogo.

Las fuerzas sociales parten, por unanimidad, de una tesis que, aunque formulada de manera diferente, ya ha sido planteada con anterioridad. El diálogo, dicen las organizaciones, "constituye el método más racional, justo y cristiano para la solución del conflicto. Es el método que tiene mayor viabilidad y está apoyado mayoritariamente por el clamor popular" (tesis 58). Sin embargo, reconocen, en la tesis 60, que hasta el momento ha dado "pobres resultados por la no participación directa de las diferentes fuerzas sociales y por la intransigencia y falta de voluntad política de las partes." No es muy alentador, hasta el momento, lo que de sí ha dado el proceso de diálogo y negociación; ni siquiera se ha logrado la humanización del conflicto.

Poco se ha hecho y poco se ha logrado, es verdad. El proceso no ha dado de sí todo lo que podría dar. Pero, aún con ello, el 98 por ciento de las organizaciones piensa que "crece

la persuasión de su necesidad, de su legitimidad, de su posibilidad, de modo que ha contribuido a crear nuevos espacios de discusión y consenso" (tesis 59). Pues, ciertamente se ha logrado más para la paz en la mesa de negociaciones que en el campo de batalla.

El diálogo y la negociación son un proceso legítimo, posible y necesario; la pacificación una exigencia ética e histórica, pero debe quedar claro que "para ganar la paz no es preciso ganar la guerra, basta con terminar con ella en términos aceptables, aceptables sobre todo para la mayoría del pueblo salvadoreño, pues si para ella lo son, lo deberían ser también para el ejército y para los frentes... Por ello, la Fuerza Armada y los frentes deben ir al diálogo abiertos a dar pasos sucesivos que no se vean frenados por orgullos corporativos o por exigencias dogmáticas."¹²

He aquí expresado el juicio de las fuerzas sociales de cara al conflicto y a los intentos de solución hasta hoy intentados. Es innegable que algunas de las consideraciones planteadas por las organizaciones son discutibles; ahora bien su puesta en discusión es también verdaderamente necesaria. Lo que no puede ni debe hacerse, bajo ningún criterio, es desautorizarlas apriorísticamente con argumentos ideologizados y, o con mentiras premeditadas. Sólo los enemigos del diálogo y de la paz y los promotores de la guerra y de la muerte pueden embarcarse en tan poco honesto cometido.

Notas bibliográficas

1. Thomas R. Campos "Interpretación global del proceso histórico '15 de octubre de 1979 — 28 de marzo de 1982," *Estudios Centroamericanos*, 1982, 403-404, p. 600.

2. Los puntos medulares de esta postura pueden observarse en el documento "La realidad económica nacional de 1979 a 1981 y sus proyecciones para 1982" de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
3. Thomas R. Campos, *op. cit.*, p. 600.
4. Thomas R. Campos, *op. cit.*, p. 615.
5. Aun cuando en este punto habría muchas fuentes pertinentes a señalar, el proceso de formación, consolidación y desarrollo del FMLN como una fuerza real y representativa, indispensable para buscar una solución realista al conflicto y para formular un proyecto auténticamente nacional se encuentra extensamente descrito en: Mario Lungo, *El Salvador 1981-1984: La dimensión política de la guerra*, San Salvador, UCA Editores, 1986. También puede consultarse el artículo "El estado actual de la guerra y sus perspectivas" del comandante Joaquín Villalobos, en *ECA*, 1986, 449, pp. 168-204.
6. *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1986, 454-455. Las ponencias de organizaciones populares, partidos políticos, universidades e Iglesia católica, presentadas en la Cátedra Universitaria de Realidad Nacional de la UCA y recogidas en esta revista, muestran una clara y decidida adhesión a esta tesis.
7. *Ibid.*, p. 638.
8. "Las elecciones de 1985. ¿Un paso adelante en el proceso de democratización?," *Estudios Centroamericanos*, 1985, 438; p. 206.
9. "Elecciones aleccionadoras," *Estudios Centroamericanos*, 1988, 473-474, p. 166.
10. *Ibid.*, p. 157.
11. En este sentido pueden consultarse: *Estudios Centroamericanos*, 1985, 438, 505-214; varios, "Las elecciones presidenciales de 1984," *Estudios Centroamericanos*, 1984, 426-427; varios. "Las elecciones del 20 de marzo de 1988," *Estudios Centroamericanos*, 1988, 473-474.
12. "Las elecciones de 1985. ¿Un paso adelante en el proceso de democratización?," *op. cit.*, p. 124.